



**Universidad  
Zaragoza**

**TRABAJO DE FIN DE GRADO**

**LA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS  
AGRARIOS CAUSADOS POR ESPECIES  
CINEGÉTICAS EN ARAGÓN**

**Autora:**

**SILVIA LÓPEZ AMBROJ**

**Directora:**

**SOFÍA DE SALAS MURILLO**

Universidad de Zaragoza Facultad de Derecho 2018

## **ÍNDICE**

<b>I. LISTADO DE ABREVIATURAS .....</b>	<b>3</b>
<b>II. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>4</b>
1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO .....	4
2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA.....	4
3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO.....	5
<b>III. CONCEPTOS TÉCNICOS BASE DEL TRABAJO .....</b>	<b>7</b>
1. PREVIO: LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS LEGISLATIVAS .....	7
2. CONCEPTO DE ESPECIE CINEGÉTICA.....	8
3. TITULAR DE DERECHOS CINEGÉTICOS.....	9
4. ESPECIAL REFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL (INAGA).....	10
5. CLASIFICACIÓN DE TERRENOS SEGÚN LA LEY DE CAZA DE ARAGÓN.....	11
<b>IV. LA RESPONSABILIDAD CIVIL .....</b>	<b>13</b>
1. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN GENERAL .....	13
2. RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL.....	16
2.1 Responsabilidad por daños según el art.1905 CC .....	16
2.2 Responsabilidad por daños según el art.1906 CC.....	17

3. RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR ESPECIES CINEGÉTICAS SEGÚN LAS LEYES DE CAZA.....	18
3.1 Régimen de responsabilidad en Ley de Caza Estatal. ....	18
3.2 Régimen de responsabilidad en la Ley de Caza de Aragón. ....	19
3.3 Comparativa entre la regulación aragonesa y el resto de normativa autonómica.....	26
<b>V.CRÍTICA AI RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD ACTUAL. EN CONCRETO, HACIA QUIÉN TIENE EL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO .....</b>	<b>29</b>
1. FINALIDAD PRINCIPAL DE LA CAZA.....	29
2. NEGACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL CAZADOR.....	31
3. FALTA DE PROPORCIONALIDAD ENTRE EL BENEFICIO DE APROVECHAMIENTO Y UN RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA.....	34
4. PROPUESTA PARA UNA NUEVA REFORMA: EL DERECHO POSITIVO COMO EXCEPCIONALIDAD.....	37
5. POSIBLE APLICACIÓN PRÁCTICA Y REFERENCIA A LAS POLÍTICAS NACIONALES DESARROLLADAS EN PAÍSES DE LA UE.....	41
<b>VI. CONCLUSIONES.....</b>	<b>45</b>
<b>VII. BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>47</b>

## **I. LISTADO DE ABREVIATURAS**

Art. = Artículo

A.P = Audiencia principal

CC.AA = Comunidades Autónomas

C.A = Comunidad Autónoma

CC = Código Civil

CE = Constitución

INAGA = Instituto Aragonés de Gestión Ambiental

LC = Ley de Caza

LCA = Ley de Caza de Aragón

UE = Unión Europea

TS =Tribunal Supremo

TSJ = Tribunal Superior de Justicia

## **II. INTRODUCCIÓN**

### **1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO**

El presente trabajo tiene por objeto analizar la responsabilidad por daños agrarios causados por especies cinegéticas en Aragón, en la que se puede apreciar, según la catalogación del terreno, la concurrencia, y en consecuencia, la posible responsabilidad de diferentes sujetos: del cazador (quien tiene el aprovechamiento cinegético), del titular del terreno o de la Administración Pública. De forma más novedosa, encontramos la responsabilidad de quienes tienen la propiedad de regadíos de nueva explotación y de aquellos que deben controlar las zonas de seguridad.

Haré especial énfasis en la responsabilidad civil del titular del aprovechamiento cinegético, ya que será un componente esencial para abordar una crítica al régimen de responsabilidad actual en el sector de la caza.

También expondré el régimen responsabilidad por daños agrarios existente en la legislación estatal y otras comunidades autónomas, pues servirá para desentrañar qué régimen de responsabilidad es preponderante desde el punto de vista territorial.

### **2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA**

La elección del tema deviene de una situación que he venido observando desde hace años. La práctica de la caza y las responsabilidades que, en ocasiones, son reclamadas cuando se producen este tipo de daños son bien conocidas en municipios como el mío.

La actividad cinegética contribuye a mantener el hábitat natural y el equilibrio ecológico si se practica de una forma responsable. La explotación de terrenos cinegéticos no es una cuestión insignificante si se tiene en cuenta que el 80% de los terrenos rústicos están destinados a la actividad cinegética, especialmente en algunas Comunidades Autónomas.

En España fueron expedidas 1.078.852 licencias de caza con un valor económico de 20.467.997 de euros en 2010, reduciendo a 848.243 licencias en 2013.

Pese a dicha situación el número de piezas capturadas terminó aumentando en 2013, 21.653.448, frente a 20.557.945 en 2010<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Estadística Anual de Caza, Ministerio de Agricultura y Pesca.

Dichos datos numéricos no han sido suficientes para evitar la proliferación de animales salvajes, que invaden terrenos agrarios provocando graves consecuencias. Sírvese de ejemplo, el caso del Jabalí en España<sup>2</sup>, cuya población no ha dejado de aumentar en los últimos años (sumado a la posibilidad de provocar accidentes de tráfico<sup>3</sup>).

Ante el evidente efecto social, tanto el art.33 del Código de Caza Estatal, como el art.69 de la Ley de Caza Aragonesa, atribuyen la responsabilidad civil al titular del aprovechamiento cinegético (salvas las excepciones) cuando los daños agrarios son producidos por especies cinegéticas que provienen de un terreno cinegético.

Fue mi profundo desacuerdo con la situación actual y la cercanía con la que la he vivido, la principal razón por la cual decidí hacer esta investigación.

Considero que por la notoria transcendencia social que representa puede resultar oportuno el estudio de una nueva reforma, así como el impacto que deriva de su aplicación y puesta en práctica.

### **3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO**

Dado que la sustancia del trabajo es un tipo específico de responsabilidad civil, en primer lugar, y para una mayor comprensión de la legislación, se estudiarán los conceptos técnicos base del trabajo como: quién es el titular de los derechos cinegéticos, el concepto de especie cinegética, la clasificación de los terrenos en cinegéticos o no cinegéticos en Aragón y la importancia del INAGA en el sector.

Terminado lo anterior se recodarán, brevemente, las líneas maestras de responsabilidad civil por daños en general recogida en el Código Civil.

Acto seguido, desde el punto de vista territorial, se procederá por un lado, al estudio legislativo de la responsabilidad por daños provocados por animales recogida en el Código Civil y por otro, se expondrá la responsabilidad por daños agrarios provocados por especies cinegéticas de acuerdo a la Ley de Caza estatal, aragonesa, en especial, y demás Comunidades Autónomas en comparación con la anterior.

---

<sup>2</sup> Según el Anuario de Estadísticas Agrarias (AEA): las estimaciones de jabalíes cazados en España en la última temporada controlada, 2014-15, han sido de 286.919 unidades y las conseguidas treinta y cinco temporadas antes, en la 1980-81, fueron de 31.306 jabalíes.

<sup>3</sup> ROSA CALVO, << Una manada de jabalíes se cuela en la expedición del Bada Huesca>>, *Heraldo*, 22 de noviembre de 2017.

En segundo lugar, recopilando toda la información referida, se abordará una crítica al régimen de responsabilidad actual para hacer frente a los daños agrarios producidos por especies de caza que provienen de zonas cinegéticas o susceptibles de aprovechamiento. Correlativamente, defenderé la existencia del Derecho positivo en el sector como excepcionalidad y, finalmente, se abordará una propuesta al régimen de responsabilidad civil.

### III. CONCEPTOS TÉCNICOS BASE DEL TRABAJO

#### **1. PREVIO: LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS LEGISLATIVAS**

El establecimiento de un régimen de responsabilidad civil por daños causados por especies animales ha sido tradicional en nuestro Derecho histórico.

La regulación inicial de la responsabilidad extracontractual por daños causados por especies cinegéticas del Código Civil se caracterizaba por un sistema de responsabilidad civil subjetiva, prevista en el art.1906.

El Código civil, en principio, parecía partir de la concepción romana de la pieza de caza como *res nullius*, frente a la concepción germánica de la vinculación de la caza a la propiedad de la tierra o, incluso, al poder público al margen de la titularidad de los terrenos a modo de concesión real bajo el sistema de las regalías.

La aparición de normas específicas en materias de caza, cuyo hito se encontraría en la Ley de Caza de 16 de mayo de 1902 – con una evolución que culminaría en la Ley de Caza de 4 abril de 1970- supone un cambio en esta materia. La Ley de 1970 tendría como rasgo sobresaliente la intervención del poder público para conciliar las dos posturas existentes: la de raíz romana con un principio absoluto de libertad de caza y, por otro, la germánica con una configuración fundamentada en un aprovechamiento derivado de la propiedad del fundo.

Tras la Constitución de 1978, su art.148.11 atribuyó la materia de caza a la competencia exclusiva de las CC.AA (aunque el Estado se reserva la competencia en legislación básica sobre protección de medio ambiente en el art. 149), lo que ha supuesto que la totalidad de los Estatutos de Autonomía hayan asumido la competencia en la materia admitiéndose su total ordenación. En la actualidad, se regula en las respectivas Leyes Autonómicas mediante leyes sectoriales o normativa de inferior rango.

Es posible observar como en materia de caza se ha producido un desplazamiento del régimen de responsabilidad inicialmente recogido en el art.1906 del CC hacia unas leyes especiales, en nuestro caso, la actual Ley de Caza de Aragón 1/2015.



Formalmente la LC de 1970 todavía opera como marco regulatorio básico a escala estatal y sus disposiciones han de entenderse aplicables a falta de regulación autonómica o, en su caso, como derecho supletorio, con el alcance que se establece en el art. 149.3 *in fine*. Ello, sin perjuicio de que existen materias relacionadas con la caza que inciden en materia de la exclusiva competencia estatal, como son la de «legislación mercantil y penal» (art. 149.1.6 CE), en lo que se refiere a los seguros que se imponen en el ejercicio de la caza.

De acuerdo al diverso marco legislativo, me centraré en el estudio de LCA 1/2015 para mostrar el régimen de responsabilidad asumido, organización y funcionamiento.

## **2. CONCEPTO DE ESPECIE CINEGÉTICA**

La jurisprudencia ha hecho una clasificación sobre las tres especies de animales en libertad o salvajes, entre los que distingue: los animales protegidos, los animales de interés o aprovechamiento cinegético y los animales no incluidos en ninguno de estos grupos<sup>4</sup>.

En concreto, el art.6 de la LCA establece que:

«Son especies cinegéticas, y, por lo tanto, piezas de caza, las que se determinen en el Plan General de Caza de Aragón publicado en el Boletín Oficial de Aragón, para cada temporada cinegética, quedando excluidas de tal categoría las especies catalogadas o sujetas a cualquier régimen de especial protección y los animales domésticos no asilvestrados».

No obstante, de las especies cinegéticas definidas en el Plan General de Caza para la temporada, en los cotos solamente se podrán cazar aquellas que hayan sido autorizadas en su plan técnico y en el plan anual de aprovechamiento cinegético correspondiente, en las modalidades y periodos que en éstos se prevean.

Añadir que cuando la acción de cazar se realiza legalmente, el cazador adquiere la propiedad de las piezas mediante la ocupación, es decir, en el momento de su muerte o captura.

---

<sup>4</sup>Sentencias como: SAP (Sección 1ª) de Teruel, 30 de marzo 2004 (ROJ 76/2004).

La liberación al medio de una pieza de caza viva, tanto capturada previamente como procedente de granja cinegética, supone que su propietario renuncia a su dominio, de tal manera que cualquier otra persona puede adquirirla por ocupación, art. 7 de la LCA.

### **3. TITULAR DE DERECHOS CINEGÉTICOS**

Debemos comenzar definiendo quién es el titular de los derechos cinegéticos. Ello se recoge en el art.5 de la LCA:

«El propietario de un terreno es el titular de los derechos cinegéticos del mismo, tanto si este está clasificado como cinegético como si no. Los derechos cinegéticos podrán ser cedidos o arrendados por su titular a terceros»

En su apartado dos:

«Los derechos y obligaciones establecidos en esta ley, en cuanto se relacionan con los terrenos cinegéticos y no cinegéticos, corresponden al propietario o a los titulares de derechos reales o personales sobre las fincas que comprendan el uso y disfrute del aprovechamiento de la caza en ellas»

Respecto a esto último, el régimen de aprovechamiento de los cotos, en especial, lo encontramos en el art.19, sobre las cesiones y arriendo de los derechos cinegéticos. Dice lo siguiente:

«Los contratos de arrendamiento y acuerdos de cesión de los derechos cinegéticos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo anterior deberán especificar su duración, que no podrá ser inferior al tiempo mínimo de adscripción de los terrenos al régimen de coto»

De la lectura de los presentes artículos se puede inferir que la titularidad del derecho cinegético recae en el propietario del terreno.

Dicho propietario podrá arrendar o ceder ese derecho, por lo que se deduce que el cazador o la sociedad de cazadores que tengan permiso para el aprovechamiento cinegético han celebrado un contrato de arrendamiento o un acuerdo de cesión del propio derecho.

#### **4.ESPECIAL REFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL (INAGA)**

Es una importante entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía funcional, patrimonial y administrativa, así como plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines.

El Instituto depende de la Administración de la C.A de Aragón y está adscrito al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.

Su especial relevancia se encuentra en la función principal de la entidad. Se encarga de declarar los cotos como tal (art.15 LCA) y **regular sobre el aprovechamiento cinegético.**

El INAGA es quién, además, aprueba los planes anuales de aprovechamiento cinegético (art.38 LCA) necesarios para ejercer la actividad cinegética en los cotos.

Estos planes anuales se presentan y aprueban en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y en ellos, se detallan las circunstancias específicas de la temporada en relación con los siguientes aspectos:

- Las especies susceptibles de ser cazadas y sus cupos.
- Los días hábiles para el ejercicio de la caza.
- Las modalidades de caza, en su caso.
- La presión cinegética.
- Cuantas actuaciones de índole cinegética se pretendan desarrollar en la temporada.

De acuerdo al art.64, el INAGA, también será el responsable para autorizar la repoblación y suelta de piezas de caza en el medio natural.

Hago especial referencia al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental para plasmar la importante colaboración que se da entre los entes públicos y las sociedades de cazadores encargadas del aprovechamiento cinegético.

La entidad es responsable de regular las especies susceptibles de ser cazadas y sus cupos mediante el plan anual de aprovechamiento cinegético. Mientras que las sociedades de cazadores se limitan al buen funcionamiento o gestión del coto, es decir, del terreno mismo. Todo ello con el fin de mantener el equilibrio de la fauna y disminuir tanto los daños agrarios como no agrarios.

## **5. CLASIFICACIÓN DE TERRENOS SEGÚN LA LEY DE CAZA DE ARAGÓN**

La clasificación de los terrenos no es baladí para el régimen de responsabilidad civil por daños causados por las piezas de caza, sino que, en la medida que el criterio de imputación principal es la procedencia del animal causante del daño (con distintos sujetos responsables según el terreno del que proceda), va a incidir, como tendremos ocasión de comprobar, en la estructuración de dicho régimen. Por tanto, para tener claro quiénes serán los sujetos responsables, debemos conocer la calificación de terrenos que la LCA prevé:

**Art.8:** «A los efectos de la presente ley, el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón se clasificará **en terrenos cinegéticos y no cinegéticos**».

**Art.9. «De la clasificación de los terrenos cinegéticos»:**

a) Reservas de caza. Desarrollada en su art.13 y definidas como terrenos delimitados para «promover, conservar y fomentar determinadas especies cinegéticas».

b) Cotos de caza. Desarrollados en el art.15 y ss. Definidos como «toda superficie continua de terreno señalizado en sus límites susceptible de aprovechamiento cinegético racional»

**Art.16 sobre la clasificación de los cotos de caza atendiendo a:**

1. Sus fines y titularidad que se clasifican en:

a) Cotos de titularidad pública:

- Cotos sociales.
- Cotos municipales.

b) Cotos de titularidad privada:

- Cotos deportivos.
- Cotos privados:
- Cotos intensivos de caza menor

2. Atendiendo al objeto principal del aprovechamiento cinegético, los Cotos de caza se clasifican en:

- a) Cotos con aprovechamiento de caza mayor.
- b) Cotos con aprovechamiento de caza menor y jabalí

**Art.10. De la clasificación de los terrenos no cinegéticos:**

a) Vedados. Art. 30: «Tendrán como finalidad principal la recuperación de poblaciones cinegéticas y la conservación y la protección de fauna catalogada como amenazada [...] Con carácter general, en los vedados está prohibido el ejercicio de la caza».

b) Zonas no cinegéticas. Art.31: «Exista una prohibición con carácter general para ejercitar la caza y que no tengan la calificación de cotos de caza, reserva de caza o vedados de caza».

Dentro de las zonas no cinegéticas podríamos diferenciar aquellas que lo son por decisión administrativa (el criterio de imputación es el de la gestión y Administración de los terrenos) y las que lo son por voluntad de los propietarios (el criterio de imputación es la propiedad).

#### **IV. LA RESPONSABILIDAD CIVIL**

La responsabilidad civil se refiere a la obligación que tiene un sujeto de indemnizar a otro al que le ha causado un daño en aquellos supuestos en los que le es imputable.

En el art.1089 CC se enumeran las fuentes de las que surgen las obligaciones. Entre ellas, se dice que las obligaciones nacerán de «los contratos y de los cuasicontratos y de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia».

En este precepto la ley ya delimita la responsabilidad que surge derivada de un contrato- contractual- y de un acto u omisión –extracontractual-.

Para que surja la responsabilidad civil, por tanto, será suficiente con la causación de un daño a otra persona que no está obligada a soportarlo.

##### **1. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN GENERAL**

La regla ordinaria de la responsabilidad por daños se encuentra en el art.1902 CC (por hechos propios) que establece que «el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, estará obligado a reparar el daño causado».

De este artículo se desprende un criterio subjetivo basado en la culpa del agente, necesario para que el sujeto que haya causado el daño esté obligado a repararlo.

La responsabilidad civil puede surgir de una relación preexistente, como es el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de un contrato o puede ser una obligación contraída al margen de una relación contractual (responsabilidad civil extracontractual).

El art. 1903 establece que la responsabilidad extracontractual surgirá, no solo por los actos u omisiones propios, sino también de aquellas personas de las que se debe de responder (responsabilidad por hecho ajeno). Así, encontramos:

- **A los padres como responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda.** El fundamento de dicha atribución de responsabilidad ha de encontrarse, según parte de la doctrina «en la culpa

presunta en que el responsable incurrió por no ejercitar de manera correcta la obligación de vigilar las actividades del menor o incapacitado»<sup>5</sup>.

- **Al tutor, responsable de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía.** Misma justificación que en el anterior.
- **Al empresario, responsable directo respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el ejercicio de sus funciones.** Esta responsabilidad directa se establece por incumplimiento de los deberes que imponen las relaciones de convivencia social, de vigilar a las personas y a las cosas que están bajo la dependencia de determinadas personas y emplear la debida cautela en la elección de los servidores y en la vigilancia de sus actos<sup>6</sup>.
- **A los profesores y educadores, que responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos, menores de edad,** durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado. Se trata de una subrogación del centro docente en la de vigilancia y control de los padres de los menores y por ello nos encontramos ante otro caso de responsabilidad por culpa *in vigilando*<sup>7</sup>.

En otros preceptos del CC:

- **Por daños causados por animales domésticos.** El art.1905 del CC (sobre el que me detendré en el apartado 2) regula un régimen de responsabilidad objetiva por riesgo de tenencia del animal o su utilización en propio provecho. En cambio, por los daños del art. 1906 del CC (que se estudiará en el apartado 3) se declara una responsabilidad basada en la negligencia (presunta) del propietario de la heredad de caza (el cual podría verse tácitamente derogado a través de la disposición final tercera por la Ley de Caza).

---

<sup>5</sup> ROCA TRÍAS, E y NAVARRO MICHEL, M. *Derecho de Daños, textos y materiales*, 6º edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, p.150 y ss.

<sup>6</sup> STS (Sala de lo Civil) de 6 de junio de 1997 (ROJ: 3999/1997).

<sup>7</sup> STS (Sala de lo Civil) de 10 de diciembre de 1996 (ROJ:7060/ 1996) y 4 de junio de 1999 (ROJ: 3939/1999).

Es notorio que el CC no establece distinciones entre el art. 1905 y 1906, sino que habla del animal en general.

Al igual que nuestra concepción sobre los animales nos hace distinguir entre animales domésticos (que viven en compañía o dependencia del hombre y no son susceptibles de apropiación) y fieros (que vagan libres por la tierra, el aire o el agua y son objeto adecuado para la apropiación, caza o pesca.), la jurisprudencia y doctrina se pronuncian sobre dicha distinción, entendiendo que ante el contenido del art. 1906 CC, el art. 1905 es aplicable a los animales domésticos y los de caza y salvajes deben incluirse en el art.1906<sup>8</sup>.

Es cada vez más común que los animales que normalmente se han considerado salvajes convivan con las personas, por lo que además del CC se ha ido dando la promulgación de ciertas leyes<sup>9</sup>.

- **Por ruina de los edificios.** Se tiene en cuenta como punto de partida la falta de reparación. Hay un incumplimiento de la obligación del propietario de efectuar las reparaciones necesarias para evitar la ruina de los edificios (arts.389 y ss. del CC)<sup>10</sup>.
- **Por actividades industriales.** En concreto, nucleares o radiactivos (objeto de una legislación especial). Se justifica con una elemental idea de justicia. Si con su actividad una persona se procura un beneficio, es justo que repare los daños que causa. Se responde por el resultado producido por la práctica de una actividad intrínsecamente peligrosa, pero aceptada socialmente, hasta el punto que no puede excluirse sin grave peligro de la economía general<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> SAP (sección 13ª) de Barcelona, 5 de octubre de 2017 (ROJ: 9881/2017).

<sup>9</sup> Ley 50/1999 sobre el Régimen jurídico de la Tenencia de Animales potencialmente peligrosos y la ley 13/2002 sobre de tenencia, protección y derechos de los animales. Esta última hace una diferenciación conceptual entre animales domésticos, salvajes y potencialmente peligrosos. No obstante, no afectan a la vigencia del art. 1905 del CC.

<sup>10</sup> SAP (sección 21ª) de Madrid, 23 de marzo de 2010 (ROJ 4192/2010).

<sup>11</sup> ROCA TRIAS, E. « El riesgo como criterio de imputación subjetiva del daño en la jurisprudencia del Tribunal Supremo español» , *Indre: revista para el Análisis del Derecho*, Nº 4, 2009, pp.5 y ss.



- **Por caída de árboles** (art. 390 CC). Responsabilidad objetiva ya que se impone a los propietarios la obligación de arrancar y retirar el árbol que amenace caerse.

Con arreglo a las diferentes circunstancias que intervienen podemos distinguir, por tanto, entre una responsabilidad objetiva y una responsabilidad subjetiva.

En concreto, el criterio de imputación de una responsabilidad objetiva, a diferencia de la subjetiva, prescinde de un comportamiento culpable o negligente en la acción u omisión del sujeto.

Conviene advertir que nuestro sistema de responsabilidad extracontractual sigue siendo eminentemente subjetivo y tiene por piezas clave dos elementos, el ilícito y la culpabilidad.

## **2. RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL.**

### **2.1 Responsabilidad por daños según el art. 1905 CC**

La responsabilidad de los actos ocasionados y de los daños producidos por animales viene determinada, de forma general, en el art.1905 del CC:

« El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido».

Hay un carácter objetivo que hace recaer la responsabilidad de los desperfectos, no al dueño, sino al «poseedor, o al que se sirve de él»<sup>12</sup>.

La responsabilidad objetiva sin culpa deriva del hecho de que el agente ha creado un riesgo o incrementado su probabilidad. Por un lado, porque el sujeto que lo posee o usa crea un riesgo de daño para las restantes personas o cosas. Por otro lado, el sistema de responsabilidad por riesgo parte del principio de la presunción culposa del agente, pues obtiene un beneficio sobre la base de una actividad que comporta riesgo para los

---

<sup>12</sup> STS (Sala de lo Civil) de 21 Noviembre 1998, como una responsabilidad de «carácter plenamente objetiva» ( ROJ 6927/1998).

demás<sup>13</sup>. Es decir, la doctrina entiende que detrás de obtener el beneficio de un animal, hay una desventaja, *ubi commodum ibi incommodum*<sup>14</sup>.

A la responsabilidad potencial del peligro se le añade que este debe ser continuamente controlado por quién está en disposición de hacerlo, esto es su poseedor o quién se sirve de él<sup>15</sup>. Sin embargo, este deber no la convierte en una responsabilidad de la culpa *in vigilando* (la diligencia en la vigilancia del animal no exime de la responsabilidad<sup>16</sup>) sino que se corresponde con la avalancha de animales domésticos en lugares público y la necesidad de unas medidas de caución normalmente exigibles

La exoneración del poseedor se da, únicamente, cuando la culpa fuere exclusivamente de la víctima o cuando deviniera una fuerza mayor.

## **2.2 Responsabilidad por daños según el art.1906 CC.**

El art.1906 del CC establece que «el propietario de una heredad de caza responderá de los daños causado por ésta en las fincas vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación o cuando haya dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla».

A diferencia de la responsabilidad recogida en el art.1905 CC, donde el propietario del animal es el responsable, en todo caso, de los daños y perjuicios que causare el mismo «aunque se le escape o extravié». La responsabilidad del art.1906 prevé la circunstancia especial de que la cría de animales de caza en los montes y demás fincas rústicas tiene lugar independientemente de la voluntad del propietario y, por consiguiente, se constituye un riesgo propio y natural de las fincas próximas a los montes, bosques y demás sitios donde se produce la caza.

El riesgo es aceptado voluntariamente por los dueños de las fincas, por el hecho de adquirirlas, pero no es un mal que provenga exclusivamente de su voluntad y por ello, se ha limitado su responsabilidad a dos supuestos: cuando no se hace lo necesario para

---

<sup>13</sup>RAMOS MAESTRE, A. *La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales*, Dykinson, Madrid, 2003, pp. 245-262.

<sup>14</sup> VICENTE DOMINGO, E. «Los daños causados por animales», en *Tratado de responsabilidad civil*, BUSTO LAGO, J.M (coordinador), 3º edición, Aranzadi, Navarra, 2006, pp.1605-1615.

<sup>15</sup> SAP (sección 4º) de Zaragoza 1 diciembre 1997 (ROJ: 357/ 1997).

<sup>16</sup> VICENTE DOMINGO, E. «Los daños causados por...»,cit. p.1606 y ss.

impedir su multiplicación o se dificulta la acción de los dueños de fincas vecinas para perseguirla (negligencia presunta)<sup>17</sup>.

La responsabilidad del art.1906, debido a la promulgación de otras leyes posteriores al Código Civil,-como la ley de Caza de 1970-, ha evolucionado de un concepto subjetivo, que exige culpa del agente al que le es imputable la causación del daño, a un sistema de responsabilidad objetiva derivado del mero riesgo o peligro que genera la actividad a terceros<sup>18</sup>.

Es destacable puntualizar aquí, que el Código Civil (en contraste con otras legislaciones que serán estudiadas a continuación) no se pronuncia sobre una posible responsabilidad del titular del aprovechamiento, señalando como único responsable al propietario de los terrenos.

### **3. RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR ESPECIES CINEGÉTICAS SEGÚN LAS LEYES DE CAZA**

#### **3.1 Régimen de responsabilidad en Ley de Caza Estatal.**

La ley de caza de 1970, en su art. 33, inauguró un régimen responsabilidad objetiva que se apartaba del régimen previsto en el art.1906 CC (entendido como tácticamente derogado por dicha ley<sup>19</sup>) y establecía como sujeto responsable directo a «los titulares de los aprovechamientos» y subsidiariamente a «los propietarios de los terrenos» por animales procedentes de terrenos acotados<sup>20</sup>.

Existe una presunción *iuris et de iure* de responsabilidad que afecta, en primer término, al titular del aprovechamiento.

La LC de 1970 omitía la responsabilidad por daños cuando las piezas procedían de los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común. Como consecuencia, la doctrina legal y científica debatió entre imputar la responsabilidad a la heredad de caza de la que

---

<sup>17</sup> MANRESA Y NAVARRO, J.M. *Comentarios al Código Civil español*, Tomo XII, 2º edición, Bonda de Atocha, Madrid, 1911, pp. 633-645 y siguiendo la doctrina de Manresa: SAP (sección 13º) de Barcelona, 5 de octubre de 2017 (ROJ: 9881/2017).

<sup>18</sup> VICENTE DOMINGO, E., «*los daños causados por animales...*», cit. pp. 1615-1619.

<sup>19</sup> STS (Sala de lo Civil) de 27 de mayo 1985 (ROJ 1872/1985). Consideró que a Ley de Caza habría derogado el art.1906 ya que «el sistema individualista subjetivo del propietario se oponía al criterio objetivo de la ley».

<sup>20</sup> PARRA LUCÁN. M.A, « La responsabilidad por daños producidos por animales de caza», *Revista de Derecho civil aragonés*, Nº 2, 1999, pp. 23 y ss.

proviniesen las piezas, conforme al criterio tradicional del art.1906 CC. Justificada como una responsabilidad por culpa del propietario de la heredad por no tomar las debidas precauciones para evitar el daño y no de la Administración<sup>21</sup> y, por otra parte, quienes defendían que de los daños provocados por especies procedentes de terrenos libres debía responder directamente la Administración<sup>22</sup>.

### **3.2 Régimen de responsabilidad en la Ley de Caza de Aragón.**

#### **A) Evolución del régimen de responsabilidad en la Ley de Caza de Aragón.**

El régimen introducido **por la Ley de Caza aragonesa 12/1992** (—modificada por la Ley aragonesa 10/1994, de 30 de octubre—, como precedente directo del art.71 de la Ley aragonesa 5/2002, de 4 de abril) distinguía claramente, en su art.72, dos posibles sujetos responsables: la «Diputación general» y « los titulares de los cotos comerciales y deportivos».

La primera debería indemnizar por los daños causados por especies cinegéticas procedentes de terrenos no cinegéticos, de reservas de caza, refugios de fauna silvestre, de espacios naturales protegidos y cotos sociales. Por lo que existía una obligación general de pago que parecía justificarse en una falta de diligencia en la gestión del acotado:

«1. Serán indemnizados por la Diputación General, previa instrucción del oportuno expediente y valoración de los daños producidos:

- a) Los daños ocasionados por las especies cinegéticas procedentes de los terrenos no cinegéticos.
- b) Los daños ocasionados por especies de la fauna silvestre no susceptibles de aprovechamiento cinegético, cualquiera que sea su procedencia.

---

<sup>21</sup> Díez-PICAZO, L y GULLÓN, A. *Sistema de Derecho civil*, vol. II, 9ª edición, Tecnos, Madrid, pp.570 y ss.

<sup>22</sup> SÁNCHEZ GASCÓN.A. *El derecho de caza en España: de los terrenos y piezas de caza*, Tomo I, Tecnos, 1988, pp.262-280.

c) Los daños ocasionados por las especies cinegéticas de las reservas de caza, refugios de fauna silvestre y los espacios naturales protegidos. Asimismo, serán indemnizados los daños causados por las especies cinegéticas de los cotos sociales.

2. Los titulares de los cotos comerciales y deportivos de caza serán responsables de las indemnizaciones por daños producidos en cultivos por las especies cinegéticas.»

Este régimen se completó por medio de un Reglamento de desarrollo parcial de la ley<sup>23</sup>, que incluía como daños a indemnizar por la Administración de la C.A los causados por especies cinegéticas procedentes de terrenos cinegéticos de aprovechamiento común (art.39.1.b). Asimismo, también precisaba que los daños a indemnizar por los titulares de los cotos comerciales y deportivos de caza en régimen de aprovechamiento especial no gestionado por la Administración Pública lo serían de «cualquier tipo ». Es decir, no sólo daños agrarios, sino también, los que daban lugar a accidentes de tráfico causados por irrupción de las piezas de caza en vía pública, con independencia del tipo de aprovechamiento del acotado -caza mayor o caza menor-, lo que llevará finalmente a una distinción entre daños agrarios y no agrarios con distinto agente responsable.

La posterior **Ley de Caza de Aragón 5/2002** definía la titularidad del derecho cinegético en su art.5 como «titularidad de derechos reales o personales sobre las fincas que comprendan el uso y disfrute de la caza». Modificaba la clasificación de los terrenos de caza, en concreto: desaparecen los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común y se introducen como terrenos no cinegéticos que vienen a ser zonas no cinegéticas voluntarias.

Se incluye un deber específico de conducta dirigido a los titulares de terrenos cinegéticos, que se extiende a los propietarios afectados por los daños mediante la adopción de «medidas para evitar riesgos» en su art. 71.6:

«Los titulares de los terrenos cinegéticos, en colaboración con los propietarios afectados por los daños, deberán adoptar medidas precautorias para evitar el riesgo de que estos daños se produzcan.» Además, de acuerdo al art 71.1:

---

<sup>23</sup> Decreto 108/1995, de 9 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se desarrollan los títulos I, II, IV de la ley 12/1992, de 10 de diciembre, de caza, de la Comunidad Autónoma.

«Los titulares de terrenos cinegéticos serán responsables de los daños de naturaleza agraria ocasionados por las especies cinegéticas procedentes de los mismos, salvo que el daño causado sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero ajeno al titular de la explotación».

Ello lo aproximaría al propio art.1906 CC, por el reproche de culpabilidad que se introduce y la quiebra de dicho deber, distorsionando el sistema de responsabilidad objetiva.

A diferencia del art.33 de la LC Estatal, ya no establece una presunción *iuris et de iure* de responsabilidad del titular del aprovechamiento, sino una presunción *iuris tantum*, que puede ser destruida probando que el daño causado es debido a la culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero ajeno al titular de la explotación.

En tercer lugar, distinguiría entre daños agrarios y no agrarios con distinto régimen de responsabilidad.

De la actual **Ley de Caza de Aragón 1/2015** cabe destacar, por el supuesto que nos ocupa, que se especifica con mayor claridad que en la ley anterior a quién pertenecen los derechos cinegéticos, atribuyéndolos expresamente al dueño del terreno, tanto si está calificado como cinegético o como si no. Estos mismos derechos, podrán ser cedidos o arrendados por su titular a terceros.

Por otro lado, las especies cinegéticas serán determinadas en un Plan de Caza y se especifica que en los terrenos no cinegéticos se prohíbe el ejercicio de la caza «con carácter general» y no «permanente» (más ajustado a la realidad).

El título IX de la ley diferencia visiblemente los tipos de responsabilidad por daños en tres artículos:

1. El art.68 «sobre la responsabilidad del cazador durante el ejercicio de la caza y el seguro obligatorio».

La sustancia del precepto es sobre los daños corporales que pudieran ser ocasionados durante el ejercicio de la caza y la obligatoriedad del seguro de

responsabilidad civil del cazador<sup>24</sup>. El seguro cubrirá en todo el territorio español la obligación del cazador con armas de indemnizar los daños corporales causados a las personas por la acción de cazar.

2. Art.69 «sobre la responsabilidad por daños producidos por especies cinegéticas en la agricultura, bienes forestales y ganadería». La cual será objeto de análisis con posteridad.
3. Art.70 «sobre la responsabilidad en accidentes de tráfico ocasionados por especies cinegéticas». A diferencia de la anterior ley, este tipo de daños ya no es catalogado como «no agrarios» y se entiende como regla general que es sujeto responsable el conductor del vehículo.

Tanto en la responsabilidad recogida en el art. 69 como el art.70 se acentúa la utilidad pública e interés social y la necesidad de un control poblacional. No obstante, la previsión expresa del art.71.6 de la anterior LCA 5/2002 desaparece.

La vigente Ley de Caza, no recoge el deber específico de colaboración y adopción de medidas precautorias por los propietarios de los terrenos para evitar el riesgo de daños agrarios.

Tampoco se recoge como exención de responsabilidad la culpa o diligencia del perjudicado. Si bien es cierto, a diferencia de la anterior regulación, encontramos la obligación del perjudicado a notificar con unos plazos muy precisos, cuyo incumplimiento pudiera suponer la pérdida de su derecho a ser indemnizado.

Otra novedad de la nueva ley es la exigencia de que los titulares de los cotos lleven un libro registro de las batidas realizadas, lo que permitirá disponer de una información veraz y facilitar el control de la actividad.

También se añade una nueva previsión relativa a los regadíos de nueva creación: el único responsable será el propietario de los terrenos donde se hayan producido los daños, no ostentando derecho a solicitar indemnización.

---

<sup>24</sup> Regulado por el Real Decreto 63/1994, de 21 de enero por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de subscripción obligatoria.

Asimismo, se establece que los titulares de determinadas infraestructuras serán responsables por los daños ocasionados por especies que procedan de unas zonas de seguridad que no sean necesariamente de su propiedad.

### **B) Responsabilidad Civil por los daños agrarios en Aragón**

La fijación general del régimen de responsabilidad por daños pivota sobre la diferenciación entre los daños agrarios y los daños no agrarios. Dentro de los daños agrarios un elemento fundamental del título de imputación para determinar al sujeto responsable se soporta sobre el origen de la pieza de caza.

La jurisprudencia ha calificado la procedencia como el lugar donde anidan los animales en relación física de proximidad o colindancia con aquel que ocurrieron los daños. Además, las especies cinegéticas deben tener un vínculo con el lugar del que proceden, constituyendo su hábitat habitual o un lugar de paso más o menos frecuente<sup>25</sup>.

Junto con ello, no podrá interpretarse simplemente como el lugar de donde sale el animal (enorme movilidad), sino que se presume que procede de terrenos colindantes, siempre que tengan en ellos una relativa permanencia y mínimas condiciones de vida que permitan su aprovechamiento, en el que se basa la responsabilidad objetiva que se le exige<sup>26</sup>.

Se considerará causa suficiente de desestimación no probar que el animal que provoca el daño tiene su hábitat en el coto o finca demandada<sup>27</sup>.

Un problema innegable que se produce en materia de responsabilidad por daños causados por especies cinegéticas es la dificultad de determinar su origen en algunas ocasiones. El anterior art.71.4 de la ley 5/2002 establecía una regla de solidaridad que ha sido derogada por la ley 1/2015, la cual no establece ninguna previsión al respecto. No obstante, el reglamento de la ley estatal de caza si prevé dicha cuestión de la misma

---

<sup>25</sup> STS (Sala de lo Civil) 22 de diciembre de 2006 (ROJ 8680/2006).

<sup>26</sup> SAP (sección 1ª) de Teruel de 27 de noviembre de 2001 (ROJ 369/2001).

<sup>27</sup> STS (Sala de lo Civil) 23 julio de 2007 (ROJ 5393/2007).



manera que la ley aragonesa hacía en su art 35 b)<sup>28</sup>. Lo que nos llevaría a una aplicación supletoria de dicha norma.

Explicado lo anterior, nos centramos en la responsabilidad por los daños agrarios, recogida en el art. 69.1 a) y b) de la LCA.

De forma previa al establecimiento de los criterios de imputación, se recoge la posibilidad de que los propietarios de los terrenos o ganados afectados y los titulares de los derechos cinegéticos de las especies de caza puedan pactar la responsabilidad civil (preferencia a la libertad de pacto).

A falta del mismo, como regla general prevista en el art 69.1 b), los daños originados por especies de cazas procedentes de terrenos cinegéticos serán responsables los titulares de los derechos cinegéticos del terreno.

No así, en el supuesto de daños originados por especies de caza procedentes de terrenos no cinegéticos, de los que serán responsables los titulares de los terrenos no cinegéticos, art.69.1 b).

En este último supuesto, en el caso de terrenos no cinegéticos voluntarios, viene a exonerarse, de forma voluntaria, del cumplimiento de los deberes directos y personales inherentes a la gestión de los aprovechamientos consustanciales al fundo y dificultar así la ordenación, conservación y fomento de los hábitats naturales de la fauna y, en particular, el mantenimiento reglado de los recursos cinegéticos.

Recordemos el deber general de conservación del medio ambiente regulado en el art.45.1 de la CE y la «indispensable solidaridad colectiva».

En caso de vedados, la responsabilidad será de la Administración que así los haya declarado.

Actualmente se recogen dos nuevos supuestos de responsabilidad por daños agrarios: En el art.69.1c), donde se atribuye la responsabilidad al titular de la infraestructura cuando las especies procedan de zonas de seguridad. Deberá, además, responsabilizarse

---

<sup>28</sup> Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley de Caza.

de controlar en la zona de seguridad a las especies cinegéticas que provoquen este tipo de daños.

En art.69.3 se establece como único responsable por los daños producidos, al propietario de los terrenos, que posteriormente a la promulgación de la ley, ponga en explotación regadíos de nueva creación.

En el art 69.1 d) se dan dos exenciones respecto el apartado b) (excluyendo al propietario de regadíos de nueva creación del art.69.3) que limitan, en cierto modo, la responsabilidad objetiva del precepto y niega por tanto su carácter absoluto ofreciendo una presunción *iuris tantum*:

Por un lado, cuando ya sean terrenos cinegéticos o no cinegéticos la Administración competente en ausencia de «soluciones prácticas y satisfactorias y si así le correspondiera, haya denegado al titular del derecho cinegético o del terreno no cinegético, incluyendo los englobados en vedados, las autorizaciones de carácter cinegético necesarias para evitar o prevenir daños o en caso de vedados no haya llevado unas adecuadas medidas de control». En estos casos la responsabilidad recae en la Administración.

Por otro lado, también se perderá el derecho a ser indemnizado por el perjudicado cuando este no cumpla con los rigurosos requisitos de notificación (de esta exención también gozará el titular de las infraestructuras previstas en el art. 69.1 c)).

En suma y resumiendo el art.69 podríamos decir que nos encontramos ante un sistema de responsabilidad objetiva que, *a priori*, se constituye sobre la base de una presunción legal del sujeto de la imputación.

A ello se añade la falta de exigencia al perjudicado de la diligencia necesaria para evitar el daño. La actual LCA no prevé como exención de responsabilidad la culpa o negligencia del perjudicado<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Previsto en la derogada Ley de Caza de Aragón 5/2002, art.71.

### **3.3. Comparativa entre la regulación aragonesa y el resto de normativa autonómica**

Son muchas las CC.AA que, como la aragonesa, han dictado normas en materia de caza en virtud de la competencia que les otorga el art. 148.1.11º de la CE y sus respectivos estatutos, regulando, de paso, la responsabilidad por daños causados por animales de caza.

La LCA presenta dos aspectos que le otorgan una personalidad propia dentro del conglomerado normativo que regula sobre la cuestión.

Lo más destacable, como hemos venido diciendo, es el régimen de separación de los daños dependiendo de que éstos sean de naturaleza agraria o no agraria, art 68 y ss. Por otro lado, la catalogación de terrenos a efectos de su aprovechamiento cinegético también es diferente dentro del panorama estatal y autonómico de Leyes de Caza, a excepción de la Ley de la C.A de la Rioja que establece una catalogación similar.

Sin embargo, si puede echarse en falta que en la LCA no se establece una responsabilidad subsidiaria de los propietarios en relación con la de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, como si ocurre en CC.AA como Baleares o Canarias. Si bien es cierto, se encuentra en sintonía con las normas autonómicas de la Rioja, Extremadura<sup>30</sup>, Galicia y Murcia, que tampoco prevén una responsabilidad subsidiaria.

En mi opinión, no sería descabellado que se les imputara de la misma manera que ocurre con aquellos que obtienen el beneficio de la caza, puesto que los titulares de las fincas, como contrapartida de su ejercicio, ven reducidos de forma directa los daños en sus cultivos y mantienen un interés en el fomento de la caza (entendida como subsidiaria en la doctrina<sup>31</sup>).

Por otro lado, en cuanto a la responsabilidad civil del cazador, podemos deducir que, en su conjunto, destaca la existencia de una responsabilidad objetiva hacia aquellos que tienen un aprovechamiento cinegético (Canarias<sup>32</sup>, Cantabria<sup>33</sup>, Castilla-La Mancha<sup>34</sup>,

---

<sup>30</sup> Art. 68, Ley de Caza de Extremadura 14/2010.

<sup>31</sup> MARTÍNEZ PEREDA, J.M. *Sanciones y responsabilidades en materia de caza*, Tecnos, Madrid, 1972, p.169y ss.

<sup>32</sup> Art. 32, Ley de Caza de Canarias 7/1998.

<sup>33</sup> Art. 63, Ley de Caza de Cantabria 12/2006.

Galicia<sup>35</sup>, País Vasco<sup>36</sup>, Valencia<sup>37</sup> y Andalucía<sup>38</sup>). Si bien, también es cierto que la regla general recogida en la legislación de las CC.AA es una presunción *iuris tantum* de responsabilidad (Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Baleares), pues se exige un deber de diligencia del perjudicado (que en la actual LCA no se prevé).

Únicamente parece introducirse un régimen de responsabilidad subjetiva en las Islas Baleares<sup>39</sup>, pues la responsabilidad civil de quién tiene el aprovechamiento cinegético se dará «siempre que los daños fueran evitables» y sean generados por las piezas de caza dentro de sus terrenos y colindantes.

A este régimen sería interesante añadirle lo que Castilla y León, en tema de responsabilidad, regula para determinar la diligencia del cazador: «Cumple los requisitos de debida diligencia en la conservación de los terrenos cinegéticos acotados cuando tenga aprobado el correspondiente instrumento de planificación cinegética y su actividad cinegética se ajuste a lo establecido en éste»<sup>40</sup>.

La excepción de la excepción la encontramos en la C.A de Asturias<sup>41</sup>, que establece que la Administración del principado de Asturias será responsable de los daños ocasionados por las especies cinegéticas procedentes de los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común y de los cotos regionales de caza que no sean objeto de concesión. A no ser, que los terrenos tengan un régimen cinegético especial y el titular no sea el Principado de Asturias, donde la indemnización de los daños producidos por las especies cinegéticas será responsabilidad del titular.

Resaltar que, a día de hoy, CC.AA como Canarias o Cantabria, siguen remitiéndose en supuestos específicos de responsabilidad (en general, cuando las especies cinegéticas que han provocado los daños agrarios provienen de terrenos no cinegéticos) a la

---

<sup>34</sup>Art. 8, Ley de Caza de Castilla-La Mancha 3/2015.

<sup>35</sup>Art. 62, Ley de Caza de Galicia 13/2013.

<sup>36</sup>Art. 53, Ley de Caza de País Vasco 2/2011.

<sup>37</sup>Art. 41, Ley de Caza de Valencia 13/2004.

<sup>38</sup>Art. 61, Decreto 126/2017.

<sup>39</sup>Art.50, Ley de Caza de las Islas Baleares 6/2006.

<sup>40</sup>Art. 12, Ley de Caza de Castilla y León 4/1996.

<sup>41</sup>Art.38, Ley de Caza de Asturias 2/1989.

legislación civil ordinaria, de forma absoluta Navarra<sup>42</sup> y La Rioja<sup>43</sup> o por falta de referencias directas a la responsabilidad civil por daños producidos por piezas de caza, Murcia<sup>44</sup> (entendiendo que será de aplicación lo dispuesto en la LC de 1970 y en su caso, del CC. art.1902 y ss.).

Por otro lado, a diferencia de lo que en la actual LCA no ha ocurrido (que si en la anterior), en algunas CC.AA se regula una responsabilidad solidaria cuando no sea posible precisar la procedencia de las especies cinegéticas entre el titular cinegético o propietario<sup>45</sup>.

---

<sup>42</sup> Art. 85, Ley de Caza de Navarra 17/2005.

<sup>43</sup> Art. 13, Ley de Caza La Rioja 9/1998.

<sup>44</sup> Ley de Caza de Murcia 7/2003.

<sup>45</sup> Cantabria y Andalucía

## **V. CRÍTICA AL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD ACTUAL. EN CONCRETO, HACIA QUIÉN TIENE EL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO**

### **1. FINALIDAD PRINCIPAL DE LA CAZA**

Como primer apunte conviene resaltar la importancia que el ejercicio de la caza representa.

El preámbulo de la LCA nos lo explica: « Cabe destacar al respecto la utilidad pública y el interés social de la caza derivados de la regulación y el control poblacional de las especies cinegéticas con el objeto de disminuir o evitar daños agrícolas, forestales y ganaderos, así como accidentes de tráfico producidos por las mismas».

Debemos partir de la idea de que la caza no entraña propiamente un deporte, sino que esconde un fin mayor: la utilidad pública y social y la correlativa minoración de daños agrícolas, forestales y ganaderos, entre otros.

El Plan General de Caza para la temporada 2017-2018 tiene como principales novedades disminuir los persistentes daños agrícolas producidos por el jabalí, cabra montesa o el conejo de monte, cuya plaga afecta a 112 municipios de la Comunidad <sup>46</sup>.

La existencia de estos problemas convierten su ejercicio en el único medio necesario que, hasta día de hoy, ha permitido mantener el equilibrio del ecosistema frente a muchas otras teorías que han sido imposibles de llevar a la práctica (esterilizar Jabalís o conseguir una mínima población de lobos para que estos establezcan el equilibrio) y sobre las que no me detendré.

Entendido el propósito principal que entraña su práctica, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Cuál es la justificación para afirmar que existe una responsabilidad del cazador cuando se producen este tipo de daños?

---

<sup>46</sup> ORDEN DRS/791/2017, de 5 de junio, por la que se aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2017-2018.

La jurisprudencia entiende que la responsabilidad por daños agrarios del titular del derecho cinegético es una contrapartida al beneficio que obtiene del aprovechamiento cinegético<sup>47</sup>.

La mayoría de las CC.AA en sus ordenamientos prevén como sujeto responsable por los daños provocados por animales procedentes de zonas cinegéticas al titular del aprovechamiento cinegético.

Sin embargo, en la doctrina no ha resultado tan pacífico y homogéneo como en las legislaciones autonómicas. Parte de la misma, defiende que la Administración debe ser el sujeto responsable de estos daños cuando las especies procedan de terrenos libres, por tres razones fundamentales<sup>48</sup>:

1. Porque al dueño, aunque quiera, no se le permite por la ley hacer lo necesario para evitar su multiplicación; esto es algo que compete a la Administración y no al particular.
2. El ejercicio de la caza lo regula exclusivamente la Administración, de manera que en un terreno libre el propietario no puede ni impedir, ni permitir la persecución de las piezas de caza en cuanto que es una cuestión ajena a sus facultades.
3. Tampoco a los perjudicados les está permitido perseguir las piezas de caza para evitar los daños; y, finalmente, porque al tratarse de terrenos libres, el aprovechamiento de la caza es común y no exclusivamente del dueño del predio, por lo que parece injusto deba ser responsable de los daños causados por las piezas de caza de estos terrenos.

Mantienen que la Administración ha optado por el intervencionismo en materia de caza y protección de las especies cinegéticas, de forma que al propietario o titular de un coto de caza le resulta difícil «hacer lo necesario» para evitar la multiplicación de las

---

<sup>47</sup> SAP de Lleida (sección 2ª) del 15 de abril de del 2010 (ROJ: 298/2010) o SAP de Teruel (sección 1ª), de 11 de junio de 2002(ROJ: 125/2002).

<sup>48</sup> SÁNCHEZ GASCÓN, A. *El derecho de caza en España: de los terrenos y piezas de caza*, Tomo I, Tecnos, 1998, pp.262 y ss. En el mismo sentido: MANTECA VALDELANDE, V.

especies, sin contar con la autorización de la Administración que es quien, al tener la potestad de «de hacer lo necesario» debería responder del daño causado.

En contra de esta tesis se ha consolidado numerosa jurisprudencia que entiende que el hecho de que la Administración ejerza competencias medioambientales tal y como se deriva del art. 45 CE, entre las que se entienden la regulación y protección del ejercicio de la caza en los terrenos de aprovechamiento cinegético común, no significa que sea la propia Administración la beneficiaria del aprovechamiento cinegético.

Como consecuencia, se establece la diferenciación de las labores de conservación de la naturaleza y especies con el control, vigilancia, posesión o disposición de las especies y la naturaleza, debiendo ser el agente objetivamente responsable únicamente cuando se ejerzan estas últimas competencias<sup>49</sup>.

## **2. NEGACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL CAZADOR**

De lo anterior se desprende que existe motivación suficiente para atribuir el régimen de responsabilidad objetiva por los daños agrarios producidos por especies cinegéticas a quien tiene su aprovechamiento por el beneficio que este obtiene al cazarlas.

De todas las responsabilidades objetivas que podríamos encontrar, ésta, en concreto, resulta la más ilógica.

En primer lugar, porque establece de forma genérica un nexo de causalidad suficiente cuando se concreta el origen del animal que provoca el daño. Es notorio que los animales se distribuyen y deambulan sin entender de la catalogación administrativa de terrenos y como resultado existen problemas para delimitarla procedencia de la especie cinegética cuando hay colindancia entre un terreno cinegético y un terreno no cinegético voluntario.

En segundo lugar y más importante, porque el aprovechamiento cinegético no es razón suficientemente para atribuir una responsabilidad de tal entidad. Esto mismo puede corroborarse si lo comparamos con la fundamentación que en otros sectores se da para atribuir un régimen de responsabilidad objetiva, y que paso a exponer.

---

<sup>49</sup>STSJ (Sala de lo Contencioso) de Castilla La Mancha, de 20 de octubre (ROJ: 2597/ 2004) o STSJ (Sala de lo Contencioso), Valladolid, 8 de octubre de 2015 (ROJ: 4635/2015).



a) Responsabilidad por daños provocados por animales, art.1905.

Como ya se ha mostrado, existe un régimen de responsabilidad objetiva debido al peligro que conlleva la tenencia de animales, considerados por el ordenamiento seres inconscientes e imprevisibles que pueden causar un daño en perjuicio de otro.

Es decir, se crea un riesgo consustancial a la tenencia o a la utilización en propio provecho de los animales, la cual exige tan sólo una causalidad material, estableciendo la presunción de culpabilidad del poseedor del animal. A ello se añade la obligación de vigilancia sobre el animal<sup>50</sup>.

A diferencia de lo que ocurre con las especies cinegéticas, añadido a que en el art.1905 estamos ante animales domesticados y no salvajes, el poseedor tiene el deber y la posibilidad de controlar al animal en todo momento o prestar las medidas necesarias en caso contrario.

El Alto Tribunal establece: «Una presunción iuris et de iure de culpabilidad, debido a que el hecho de tener a los animales en interés propio entraña riesgos que el propietario debe asumir»<sup>51</sup>.

Hay doctrina que defiende que cuando un animal provoca un daño, el presupuesto base es la consideración de que ha habido una falta de precauciones o medidas necesarias para impedir el daño: «resultan injustificables cuando los avances científicos permiten la utilización de medios técnicos adecuados para el control de estos animales»<sup>52</sup>.

Es evidente que la relación entre quien tiene el aprovechamiento cinegético y las especies objeto de caza nada tiene que ver con los presupuestos base del art.1905 CC.

Los animales *res nullius*, a diferencia de los domésticos, poseen absoluta libertad de movimiento, habitan en los montes y, en ningún caso han llegado allí de la mano del hombre, como un perro a una casa, sino por su propia naturaleza. Las numerosas cosechas que son devastadas por las piezas de caza se producen como consecuencia de la búsqueda de alimentos.

---

<sup>50</sup> STS (Sala de lo Civil), 20 de diciembre de 2007 (ROJ: 8274/2007).

<sup>51</sup> STS (Sala de lo Civil), 12 de abril del 2000 (ROJ: 3077/2000).

<sup>52</sup> SAP (sección 14ª) de Barcelona, 6 de febrero de 2018 (ROJ 724/2018).

A ello se añade que los animales salvajes carecen tanto de dueño como de poseedor, bien porque nunca lo han tenido o porque han sido abandonados.

b) La responsabilidad sobre energías nucleares.

Observamos que el criterio de la responsabilidad objetiva se encuentra justificado por varios motivos.

El propio sujeto es quien decide implantar una actividad potencialmente peligrosa, capaz de provocar perjuicios de gran entidad al colectivo en general. De ello podemos extraer que cuando se provoquen unos daños nucleares no será porque la empresa nuclear existía antes que el hombre, sino como consecuencia de la construcción de la empresa misma.

Además, la asunción de riesgos por parte del empresario se justifica por los potenciales beneficios económicos (proporcionalidad entre el riesgo asumido y los beneficios obtenidos).

A lo anterior se añade algo importante, que el sujeto podrá tener un absoluto control y nivel de previsibilidad sobre la central. Por lo que podrá prever los posibles riesgos inminentes y ponerles solución con rapidez (una previsibilidad que no existe en el comportamiento animal).

En nuestro caso, no puede admitirse que la generalidad de los daños agrarios producidos (búsqueda de comida por el animal) sean producidos por la actividad de la caza. Es evidente e importante destacar, que esta situación preexistía mucho antes y que el ejercicio de la caza no es el elemento desencadenante el problema, sino la única solución.

Con su práctica tampoco se obtienen potenciales beneficios económicos. Si es cierto que se alcanza el propio aprovechamiento cinegético, pero no se ve suficientemente justificado como para atribuir una responsabilidad objetiva si es comparado con la reincidencia con la que estos daños se producen, la entidad de las cuantías a las que deben hacerse frente (no es equiparable y tampoco puede ser entendido bajo la idea de

justicia)<sup>53</sup> y la excepcionalidad de este régimen de responsabilidad en nuestro ordenamiento.

c) Por último, simplemente apuntaré que si atendemos a las responsabilidades por hecho ajeno existentes en nuestro ordenamiento y las comparamos con el régimen de responsabilidad estudiado para los daños provocados por especies de zonas cinegéticas, tampoco encontramos un título previo de propiedad o posesión, deberes intrínsecos de cuidado o vigilancia. Pues si bien, el padre de familia, el tutor y demás personas obligadas a responder por otros pueden evitar los daños originados por estos, mediante la vigilancia de las personas sometidas a su autoridad o dependencia y con la exquisita elección de los de los dependientes o de los operarios cuyos servicios utilicen; y si el propietario de un edificio puede prevenir su caída y los daños consiguientes con la cuidadosa construcción del mismo, o su oportuna reparación, no sucede lo mismo con los daños provenientes de dicha clase de animales, porque no puede contrarrestarse en los brutos la fuerza imperiosa de los irresistibles instintos, aun adoptando la mayor prudencia<sup>54</sup>.

### **3. FALTA DE PROPORCIONALIDAD ENTRE EL BENEFICIO DEL APROVECHAMIENTO Y UN RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA**

El beneficio derivado del aprovechamiento cinegético debería encontrarse suficientemente justificado y entendido como contraprestación por la utilidad pública y social que entraña tal actividad, la reducción de daños agrarios que provoca a los propietarios de estos terrenos y los pagos que esté ha debido de hacer, por ejemplo, para poder cazar en el coto correspondiente o por el permiso de caza que necesita.

Además, parece ser que el aprovechamiento cinegético no acaba siendo más que un resultado necesario de la caza para conseguir los fines expuestos.

---

<sup>53</sup> Los daños a pagar por los cazadores ascendían a 36.227,12 euros en la SAP (sección 3ª) de Castellón de la Plana, 10 de noviembre del 2015 (ROJ: 1041/2015) y en la STSJ (sala de lo civil) de Aragón de 2010 hubo unos gastos a pagar de 16.700,80 euros como consecuencia de una gran población de conejos que existía en el momento. Accesible en: <https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/96/12tstsjaragon.pdf>

<sup>54</sup> Manresa Navarro, J.M. *Comentarios al código....* Cit.p.635.

Es indudable, por tanto, que no estamos únicamente ante la práctica de un deporte, sino la necesidad última de evitar problemas como la proliferación de animales, no en interés propio o beneficio individual, sino de la colectividad en general.

Con todo ello podemos entender que el beneficio del aprovechamiento cinegético debería recogerse como contrapartida de tres factores fundamentales:

1. El fin que la propia actividad lleva en sí misma. El privilegio derivado del aprovechamiento se vería absorbido por el objetivo principal, la reducción de daños que ocasiona y el mantenimiento del equilibrio del ecosistema como único medio efectivo hasta día de hoy.
2. La escasa entidad del “beneficio” ya puede, incluso, verse subsumida en el pago que el cazador realizó para poder cazar en un coto determinado o tener la licencia de caza.
3. El beneficio del aprovechamiento puede entenderse como consecuencia necesaria de la propia acción de cazar.

No hay principio de razón suficiente para entender el aprovechamiento como elemento suficiente que justifique un régimen de responsabilidad objetiva. Recordemos que nuestro sistema de responsabilidad extracontractual sigue siendo eminentemente subjetivo y tiene por piezas clave dos elementos, el ilícito y la culpabilidad.

Cuestión distinta sería si el daño que estos animales cinegéticos provocan hubiera sido resuelto, de tal forma que la generalidad fuera la no existencia de unos daños agrarios, forestales o ganaderos y la práctica de la caza tuviera como finalidad única ser un deporte.

Solo entonces tendría cabida un régimen de responsabilidad objetiva, incluso de no existir culpa o negligencia del cazador, ya que entonces existirían indicios racionales suficientes para deducir que el animal entró en esa finca como consecuencia directa de una actividad cinegética. Además, el propio aprovechamiento ya no encerraría un fin social sino individual, un mero beneficio propio.

Acentuar que el derecho cinegético es un derecho susceptible de ser arrendado. Justificar una responsabilidad objetiva en este sector por el simple uso y disfrute de la actividad cinegética sería tanto como decir que ante los daños que un edificio ha causado a otro por ruinas del primero debería atribuirse al arrendatario del mismo y no al arrendador, porque este tiene el aprovechamiento y uso del edificio. Es un absurdo.

Para terminar con el apartado, conviene puntualizar que el resultado no es otro que la utilización de quienes ofrecen la solución a un problema mayor, como un seguro de la Administración.

Paradójicamente, los tribunales resuelven a favor de la Administración considerando que una cosa es que posea una serie de potestades que le otorga la normativa y controle la actividad cinegética y otra distinta, es hacerla responder de manera objetiva, diríamos más bien, universal, por los daños que causen los animales, aunque no se sepa su procedencia<sup>55</sup>.

En algunos casos, el titular del coto responde sin más por el solo hecho de serlo, al presumir que los animales proceden precisamente del coto al que se le ha reconocido por parte de la Administración aprovechamiento cinegético. «En este supuesto concreto, la Sala tuvo en cuenta que la propia perjudicada tiene constituido sobre su finca un coto de caza y que la Reserva cuenta con vallado cinegético. Sin embargo, la finca propiedad del ayuntamiento, colindante con la de la actora, no dispone de vallado y sí le está concedido el aprovechamiento cinegético, hecho que no ha sido sopesado en la sentencia»<sup>56</sup>.

En definitiva, la Sala dio mayor peso a la concepción de *res nullius* de las especies cinegéticas y sobre todo al hecho de que la Administración no pueda convertirse en una aseguradora universal que deba responder siempre de cualquier tipo de daño, si bien en este caso ascendían a la nada despreciable cantidad de 44.325,00 euros.

Sin embargo, menos razonable parece que, ante la complicación de encontrar un sujeto responsable de estos daños, se establezca un régimen de responsabilidad objetiva sin suficiente motivación.

---

<sup>55</sup> S.TSJ de Extremadura (Contencioso-Administrativo), 13 de marzo de 2012 (ROJ: 415/2012).

<sup>56</sup> Comentario a la S.TSJ de Extremadura de Eva Blasco, Responsable de la Unidad de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental.

La realidad es que la Administración es quién se sirve del cazador para el control de las especies cinegéticas, siguiendo estas instrucciones que le son indicadas y llevando a cabo una actividad que entraña el aprovechamiento cinegético. El único elemento que impide que la Administración sea responsable de estas especies es la propiedad, pese a que su conducta pueda parecer equiparable a la de un propietario.

Incluso de ser esta la propietaria de los animales y respaldarse en la justificación de que quién se sirve de los animales es el cazador, podríamos asociarlo al caso de responsabilidad del servidor de la posesión del dueño. Solo que aquí, el servidor sería entendido como quien tiene permitida la actividad de cazar, que no la práctica solo para sí, sino que la Administración se sirve del mismo (o incluso el propietario particular del terreno). El servidor, únicamente sigue sus instrucciones y obtiene como resultado un aprovechamiento cinegético<sup>57</sup>.

Lo que quiero decir con ello es que en ningún momento encontramos base suficiente para una responsabilidad objetiva en el propio cazador, sino, en todo caso, y de forma ambigua, en el propietario del terreno o la Administración.

#### **4. PROPUESTA PARA UNA NUEVA REFORMA: EL DERECHO POSITIVO COMO EXCEPCIONALIDAD**

En mi caso, no me detendré a justificar ninguna de las doctrinas existentes acerca de si la responsabilidad debe ser del propietario (riesgo aceptado por los dueños de las fincas próximas a los montes), Administración (como responsabilidad patrimonial) o cazador (beneficio del aprovechamiento) cuando los daños son provocados por especies de caza provenientes de terrenos cinegéticos.

Principalmente porque, en estos casos, falta un presupuesto básico: ninguno de los tres sujetos, estableciendo todas medidas posibles para erradicar el problema, ostenta la cualidad de propietario, poseedor o principal con unas obligaciones o deberes previos de control o vigilancia sobre las especies cinegéticas.

---

<sup>57</sup>Sentencias como la del TS de 2 de noviembre de 2004 (ROJ: 6904/2004).

Por lo general, suele ser causa suficiente para desestimar una condición de responsabilidad probar que no se ostenta condición de dueño, poseedor o principal. Preguntémonos:

¿Seguirían existiendo los daños agrarios producidos por especies cinegéticas si los cazadores hubieran decidido o decidieran dejar de cazar? Si la Administración no se encargará de regular o gestionar el sector respecto las especies cinegéticas ¿Persistirían los daños?

Si nos hacemos estas preguntas con otro tipo de responsabilidades objetivas la solución sería sencilla. Si el propietario de una nuclear nunca hubiera decidido construirla, no habría responsabilidad existente, si quien es propietario de un perro no lo hubiera comprado no habría nacido ninguna responsabilidad sobre el animal. Lo mismo los padres que tienen unos hijos, el empresario que fabrica unos productos, o el que decide tener unos empleados.

Ninguna de estas responsabilidades y sus posibles riesgos es pre existente a una decisión del hombre. En cambio, en nuestro caso, el problema que tenemos resulta que desde la antigüedad se ha manifestado, y no por la acción del hombre, sino por la propia naturaleza del animal y su condición de *res nullius*.

Los animales salvajes llevan ahí mucho antes de que se decidieran a instalar nuevos cultivos o ganaderías, sumado a que las actividades cinegéticas que se han llevado a cabo han ido dirigidas a reparar los daños que los animales causaban a terceros.

La Administración y cazadores han terminado por ser garantes de mantener el equilibrio del ecosistema, materializado a través de la actividad cinegética y convertido en real el control poblacional.

Estos sujetos, en constante cooperación para evitar un problema mayor a través de zonas cinegéticas, no deberían responder de unos daños que son producidos por animales *res nullius*, movidos por su propia naturaleza, la de alimentarse.

Como consecuencia, negaré la existencia de un régimen de responsabilidad objetiva sobre el comportamiento de estos animales cuando provienen de zonas susceptibles de aprovechamiento, en las que se ponen todos los medios para evitar el problema. Aunque

sí lo aceptaré con motivo de una responsabilidad de asunción de riesgo o negligencia presunta de aquellos propietarios de zonas no cinegéticas voluntarias, una responsabilidad objetiva de la Administración frente a zonas y especies que no haya habilitado para la caza, teniendo como criterio de imputación las labores de control, vigilancia, posesión o disposición de las mismas que se manifiestan en la catalogación de los terrenos y las especies (protegidas o no protegidas). También del titular de las infraestructuras recogido en el art.69.1 c), quién tiene como deber previo el control en la zona de seguridad de las especies cinegéticas.

Para los demás supuestos sería plausible una responsabilidad subjetiva para este tipo de daños. Debida a un comportamiento culposo o negligente del propietario, del cazador o Administración en el cumplimiento de sus respectivos deberes y obligaciones, en especial, por especies provenientes de zonas cinegéticas.

Si atendemos a quién tiene el aprovechamiento cinegético resultaría interesante para determinar la diligencia necesaria lo previsto en la normativa de Castilla y León: «Cumple los requisitos de debida diligencia en la conservación de los terrenos cinegéticos acotados cuando tenga aprobado el correspondiente instrumento de planificación cinegética y su actividad cinegética se ajuste a lo establecido en éste». Aunque también lo es la nueva exigencia de que disponga un libro registro de las batidas para facilitar un mejor control de la actividad.

En caso del propietario debería valorarse el deber de protección del cultivo como la retirada de pedrizas o instalando mojones que aminoren el daño o faciliten la actividad a los cazadores.

Respecto a la Administración se tendría en cuenta una elaboración eficaz de los planes de caza (regulada, en cierto modo, en el art. 69.1.d) de la LCA).

Durante años, la doctrina ha debatido sobre quién debía ser sujeto responsable por los daños agrarios bajo un régimen de responsabilidad objetiva (teniendo, como consecuencia, regulaciones dispares: Código Civil, Ley de Caza estatal o legislaciones autonómicas).



Se puede decir que ninguna de las atribuciones ha resultado enteramente satisfactoria. Quizás, porque el punto de partida no debía ser la búsqueda de una responsabilidad por hecho ajeno cuando los daños eran y son provocados por especies cinegéticas *res nullius*, primordialmente porque es inexistente.

Cuando se ponen todos los medios posibles, a través de la habilitación de zonas cinegéticas, intentando controlar los daños agrarios y aun así se producen, es notorio que la producción del daño escapa del propio control del hombre. En estas ocasiones, no puede contrarrestarse la fuerza imperiosa de los irresistibles instintos del animal aún adoptando la mayor prudencia. Por lo que atribuir un régimen de responsabilidad objetiva en estos supuestos, sumado a que no existe un sujeto principal, un deber previo de vigilancia, posesión o propiedad, sería cuanto menos injusto.

Como consecuencia y para estos casos, las especies cinegéticas merecerían tener un tratamiento y regulación equiparable a la que se otorga a cualquier otro fenómeno de la naturaleza. Aunque en la práctica, indudablemente, las consecuencias y daños sean realmente incomparables no los hace distintos como punto de partida más allá de un posible control o minoración del riesgo.

Los animales salvajes no son sino que parte de la propia naturaleza, consecuencia del propio funcionamiento natural del ecosistema y en ocasiones incontrolables. Al igual que la lluvia, el granizo, las heladas o aludes producen consecuencias que nada tiene que ver, por lo general, con una acción previa del hombre, porque estas tienen su porvenir y su comportamiento de acuerdo a la naturaleza misma.

Los fenómenos de la naturaleza indican en el medio rural y originan que, en muchas ocasiones y lugares, la actividad agraria encuentre importantes dificultades para desempeñar adecuadamente la doble misión, económica y territorial, que la sociedad demanda del sector agrario. Impedir pérdidas económicas desfavorables incidiendo en la calidad de vida y mantenimiento de la actividad y población agraria.

Las mismas pueden abarcar desde el ámbito particular de unos pocos agricultores o ganaderos afectados hasta supra regionales.

## **5. POSIBLE APLICACIÓN PRÁCTICA Y REFERENCIA A LAS POLÍTICAS NACIONALES DESARROLLADAS EN PAÍSES DE LA UE**

Para hacer frente a los problemas que las especies cinegéticas provocan, he decidido informarme acerca de cómo en otros países de la UE se ha hecho frente a los daños producidos por los fenómenos de la naturaleza<sup>58</sup>.

En España no hay un sistema público preestablecido para los daños agrarios, a parte de un sistema privado de seguros agrarios que se estructuran en módulos, con diferentes condiciones de cobertura, capital asegurado, franquicia, mínimo indemnizable, fecha de contratación, etc.

Los daños son originariamente reclamados por parte del agricultor a través de su cobertura aseguradora a Agroseguro, entidad que reúne y gestiona la mayoría de estos seguros.

Una vez que Agroseguro recibe la reclamación o declaración del Siniestro, envía un perito tasador para valorar el daño. Generada el acta de tasación, se procede al pago de la indemnización reconocida en los plazos previstos en las Condiciones Generales de los Seguros Agrícolas<sup>59</sup>.

Los seguros agrarios suelen permitir la cobertura de riesgos naturales como el pedrisco, la helada o la marchitez fisiológica, entre otros.

El aumento de costes ha provocado que el sector público, a través de una entidad estatal de seguros agrarios (en colaboración con las CCAA), gestione subvenciones directas a los seguros para satisfacer parte de la prima.

También comienzan a incorporarse en las coberturas los daños provocados por la fauna silvestre, pero con una cobertura mínima del 20 % o incluso del 30% (si se sufre un daño del 80% se le resta el 20% de franquicia, que es el exceso del coste sobre la propia franquicia. Nunca cubre el 100%). Para gozar de esta cobertura habrá que tener en cuenta el módulo a elegir (con distintas opciones de aseguramiento: por parcela o

---

<sup>58</sup>Burgaz Moreno, FJ. «Las políticas de ayudas a las catástrofes agrícolas y a los seguros agrarios de la Unión Europea», *Revista española de economía agraria*, 1996, p.289-308.

<sup>59</sup>Agroseguro: <http://agroseguro.es/atencion-al-cliente/preguntas-mas-frecuentes>

explotación), el coste a soportar, el tipo de cultivo que se tenga y la temporada en la que se hace. Por ejemplo, pasado el 23 de diciembre asegurar un cultivo de secano para los daños provocados por especies cinegéticas ya no es posible<sup>60</sup>.

Cuando se producen daños provocados por fauna silvestre cinegética, Agroseguro se encarga de elaborar informes periciales y valoraciones de los daños para, posteriormente, remitir una reclamación a los titulares del aprovechamiento cinegético de los terrenos afectados. A los que se les ha llegado a exigir cantidades exorbitadas de dinero (sumado a una indefensión de las sociedades de cazadores en cuestiones de peritaje).

Como consecuencia, en algunos lugares se han planteado el abandono de la gestión de los cotos<sup>61</sup>.

Fuera del gran cambio que supondría eliminar la responsabilidad objetiva de los cazadores para este tipo de daños, al equipararlos a una adversidad natural, considero que debería tenerse en cuenta la cuantía del daño a la hora de establecer unos mínimos a indemnizar. Es decir, en algunos casos tendrían que rebajarse o que el Gobierno estableciera procedimientos específicos de ayuda a los afectados para las elevadas cantidades de dinero que no son amparadas por el sistema de seguros.

Ello se debe a que si se tienen unos daños de 44 mil euros, en caso de estar asegurados, el agricultor tendría que soportar 8.800 euros (de acuerdo a la franquicia del 20%).

También la posibilidad de que el dinero obtenido por expedir licencias o renovarlas sea destinado al pago de estos seguros o la búsqueda de una solución como método de colaboración. Recordemos, que el valor económico de las licencias expedidas en 2013 rondaba los 20.187.199 euros.

---

<sup>60</sup> Francés Gomez, E. Corredor de seguros agrarios, *Anagan*.

<sup>61</sup> «Los cazadores advierten que Agroseguro continúa exigiendo el pago de las indemnizaciones» *Europa press*, 20 minutos, 23 de febrero de 2011.

En otros países, los daños agrarios por adversidades naturales se solucionan:

1. Desarrollo de actividades específicamente destinadas por el Estado a aportar ayudas a los agricultores afectados (ejemplo de Alemania, Austria o Dinamarca).

Las ayudas para paliar los daños por riesgos de la naturaleza son compatibles con el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, art. 107.

2. Un fondo público para garantizar los daños ocasionados por riesgos de la naturaleza tanto sobre las producciones agrícolas (Suecia). Este fondo es financiado por subvenciones públicas directas.

3. Fondos que proporcionan la compensación de los daños causados, pero que excluyen esta garantía frente aquellas producciones que normalmente pueden ser cubiertas por contrato de seguros (Bélgica).

Este fondo se financia con aportaciones presupuestarias públicas, otorga a los agricultores afectados ayudas directas que pueden ser complementadas, en caso de daños de gran intensidad, con créditos subvencionados. El grado de cobertura de daños decrece a medida que se incrementan las pérdidas.

En el caso de Francia, que también tiene un Fondo Nacional, compensa a los agricultores por los daños producidos por calamidades agrícolas no asegurables y establece un límite a la indemnización otorgada y un porcentaje máximo.

Este fondo se encuentra financiado en un 50% por aportaciones estatales y un 50% mediante recargos en las pólizas de seguro contratadas por los agricultores, realizándose aportaciones públicas extraordinarias en casos necesarios.

4. Fondo de solidaridad Nacional. Se proporciona cobertura a los agricultores afectados por daños causados por calamidades naturales, para tener derecho a ayudas previstas es necesario que en la explotación afectada se registre un daño superior al 35%. La gestión y financiación del fondo se realiza por diversos organismos de la Administración pública (Italia).

5. El seguro de cosechas en Italia tiene dos modalidades diferenciadas: Por un lado, un seguro gestionado aseguradoras privadas sin ningún tipo de subvención y por otro, un

seguro concertado a través de consorcios. Los agricultores que quieran acogerse al mismo deben integrarse en dichos consorcios, los cuales contratan el seguro directamente de entidades aseguradoras constituidas al efecto. El gobierno subvenciona el seguro y establece anualmente la relación de producción que pueden ser aseguradas, fundamentalmente se garantiza el riesgo de pedrisco, realizándose experiencias puntuales en el seguro de helada.

6. Subsidios directos a los agricultores mediante la aprobación de programas específicos. El sistema se gestiona por entidades aseguradoras privadas, pero con una importante participación financiera del Estado.

El esquema básico del aseguramiento consiste en la existencia de una *cobertura base* que garantiza los riesgos, en su caso, de pedrisco e incendio en principales producción y una *cobertura complementaria* para estos de helada, tornado, tromba de agua y caída de nieve.

En definitiva, nos encontramos ante una situación que gobierno y agricultores deben resolver. Ya sea potenciando el régimen de seguros actual, que necesitaría de una mayor intervención estatal, puesto que los seguros encarecerían o no les sería rentable tener este tipo de coberturas (daños que se repiten considerablemente, en ocasiones, de elevada cuantía y la inexistencia de un sujeto al que reclamárselos) o sustituir este sistema por otro de los expuestos.

Añadir que se vería resuelto el problema derivado de la dificultad de delimitar la procedencia de una especie de caza y, como consecuencia, al sujeto responsable cuando hay una colindancia de terrenos cinegéticos y no cinegéticos voluntarios.

Sírvase de ejemplo que existen unas ayudas directas o el seguro cubre estos daños: el agricultor se ve rápidamente resarcido y la Administración o aseguradora, con facilidad de acceder al libro registro de las batidas de cazadores y observar si estos han cumplido con el control de la población de especies, pueden repetir contra los propietarios de las zonas no cinegéticas voluntarias y defender una presunción judicial. Pues existiría un enlace solido entre el hecho base y el hecho presunto de que el animal provenía de su terreno y no del terreno colindante, la zona cinegética, al corroborarse que ha cumplido diligentemente con su función en aras a un régimen de responsabilidad subjetiva frente a la objetiva de la otra parte, negligencia presunta.

## **VI. CONCLUSIONES**

Los daños a la agricultura generan un grave conflicto entre cazadores y agricultores, dificultando sus relaciones y su estrecho desarrollo conjunto, que es obligatoriamente necesario.

Tanto la Administración, el propietario de los terrenos y los agricultores, desempeñan labores fundamentales para reducir el impacto de los perjuicios causados por las especies cinegéticas. Solo con una labor de colaboración permanente, con actuaciones de buena fe y trabajo conjunto para un bien común, pueden permitir minimizar el problema social existente.

La atribución de un régimen de responsabilidad objetiva generalizado a quienes ostentan la titularidad de los derechos cinegéticos, a la Administración por el hecho de serlo o a las propietarios como obligación de soportar ese tipo de daños, no es una medida que dé respuesta a la traba existente, sino que además, dificulta este tipo de relación convirtiéndola en un ahogo constante.

Por un lado, los agricultores y propietarios de terrenos cinegéticos deben facilitar el acceso a los titulares de los derechos cinegéticos a sus terrenos. Los cazadores encuentran numerosas trabas ante cultivos abandonados, alledaños...

Por otro lado, el cazador deberá cumplir diligentemente con la actividad que desempeña, efectuando lo previsto en el plan anual de aprovechamiento cinegético aprobado por el INAGA (sometidos al control de los guardas de caza de los cotos, art.77LCA).

La Administración, encargada de establecer que especies son susceptibles de ser cazadas y en qué cantidad, debe prevenir la existencia de plagas y el ataque a cultivos de terrenos cinegéticos. Habrá de desempeñar una labor de estudio y análisis de los terrenos susceptibles de aprovechamiento cinegético y de aquellos que necesitan ser vedados.

A partir de esta identificación viene el trabajo de su evaluación y categorizar el riesgo que ello genera.

Cada uno de los sujetos mencionados debería responder, únicamente, por un desarrollo ineficiente de sus funciones (negligente o culpable) en los terrenos cinegéticos. Salvas las excepciones de los vedados respecto la Administración, los terrenos no cinegéticos voluntarios respecto los propietarios (zonas catalogadas como no cinegéticas) y los propietarios respecto a las zonas de seguridad.

Los animales salvajes son parte de la propia naturaleza. Son las personas quienes han instalado cultivos en sus hábitats, sirviéndoles estos de alimento.

Cuando se ponen todos los medios pertinentes para evitar su proliferación y minorar los daños agrarios a través de zonas cinegéticas y aun así, esos daños se producen. El animal como *res nullius*, debería recibir un tratamiento igual que el que se recibe para los daños provocados por los fenómenos de la propia naturaleza y evitar, por tanto, la lucha por encontrar un sujeto responsable de los mismos. Centrando la importancia en aprehender las políticas nacionales de la UE o potenciar la nuestra misma.

## **VII. BIBLIOGRAFÍA**

### **1. LIBROS**

BIENDICHO GRACIA, L. «La responsabilidad por daños causados por especies cinegéticas en Aragón». En *Actos de los decimoterceros encuentros de derecho aragonés*, ALONSO PÉREZ, T (Coord.et al.), el justicia de Aragón, Zaragoza-Teruel, 2003, pp.170-233.

GARRIDO MARTIN, J.L. *La caza. Sector Económico*, FEDENCA- EEC, Madrid, 2012.

MANRESA NAVARRO, J.M. *Comentarios al código civil español*, Tomo XII, Bonda de Atocha, Madrid, 1911.

MARTÍNEZ PEREDA, J.M. *Sanciones y responsabilidades en materia de caza*, 1º volumen, Tecnos, Madrid, 1972.

RAMOS MAESTRE, A. *La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales*, Dykinson, Madrid, 2003.

SÁNCHEZ GASCÓN, A. *El derecho de caza en España: de los terrenos y piezas de caza*. Tomo I, Tecnos, Madrid, 1988.

VICENTE DOMINGO, E «Los daños causados por animales» en *Tratado de responsabilidad civil*, BUSTO LAGO J (Coord.), 3º edición, Aranzadi, Navarra, 2006.

### **2. REVISTAS**

BURGAZ MORENO, F.J. «Las políticas de ayudas a las catástrofes agrícolas y a los seguros agrarios de la Unión Europea», *Revista española de economía agraria*, 1996, pp.289-308.



PARRA LUCAN,M.A. «La responsabilidad por daños producidos por animales de caza», *Revista de Derecho Civil Aragonés*,Nº2, 1999, pp.23 y ss.

ROCA TRIAS, E «El riesgo como criterio de imputación subjetiva del daño en la jurisprudencia del Tribunal Supremo español», *Indret: revista para el Análisis del Derecho*, Nº 4, 2009, pp.5 y ss.

### **3. NORMATIVA**

Circular informativa relativa a la ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza en Aragón.

Código Civil.

Constitución Española, 1978.

Decreto de Andalucía 126/2017, 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía.

Ley de Caza 1/1970, 4 de abril.

Ley de Caza de Aragón 5/2002, 4 de abril.

Ley de Caza de Aragón 1/2015, 12 de marzo.

Ley de Caza de Extremadura 14/2010, 9 de diciembre.

Ley de Caza de Canarias 7/1998, 6 de julio.

Ley de Caza de Cantabria 12/2006, 17 de julio.

Ley de Caza de Castilla-La Mancha 3/2015, 5 de marzo.

Ley de Caza de Galicia 13/2013, 23 de diciembre.

Ley de Caza de País Vasco 2/2011, 17 de marzo.

Ley de Caza de Valencia 13/2004, 27 de diciembre.

Ley de Caza de Valencia 13/2004, 27 de diciembre.

Ley de Caza de Castilla y León 4/1996, 12 de julio.

Ley de Caza de Asturias 2/1989, 6 de junio.

Ley de Caza de Navarra 17/2005, 22 de diciembre.

Ley de Caza La Rioja 9/1998, 2 de julio.

Ley de Caza de Murcia 7/2003, 12 de noviembre.

ORDEN DRS/791/2017, de 5 de junio, por la que se aprueba el plan general de caza para la temporada 2017-2018.

#### **4. JURISPRUDENCIA**

STS (Sala de lo Civil) de 27 de mayo 1985 (ROJ 1872/1985).

STS (Sala de lo Civil) de 6 de junio de 1997 (ROJ: 3999/1997).

STS (Sala de lo Civil) de 10 de diciembre de 1996 (ROJ:7060/ 1996).

STS (Sala de lo Civil) 4 de junio de 1999 (ROJ: 3939/1999).

STS (Sala de lo Civil) de 21 Noviembre 1998 (ROJ 6927/1998).

STS( Sala de lo Civil) 12 de abril del 2000 (ROJ 3077/2000).

STSJ de Castilla La Mancha, de 20 de octubre de 2004 (ROJ 2597/2004).

STS (Sala de lo Civil) 22 de diciembre de 2006 (ROJ 8680/2006).

STS (Sala de lo Civil) 23 julio de 2007 (ROJ 5393/2007).

STS (Sala de lo Civil), 20 de diciembre de 2007 (ROJ: 8274/2007).

STSJ de Extremadura (Sala de lo Contencioso), de 13 de marzo de 2012 (ROJ 415/2012).

STSJ (Sala de lo Contencioso), Valladolid, 8 de octubre de 2015 (ROJ: 4635/2015).

SAP (sección 4º) de Zaragoza 1 diciembre 1997 (ROJ: 357/ 1997).

SAP (sección 1º) de Teruel de 27 de noviembre de 2001 (ROJ: 369/2001).

SAP (Sección 1ª) de Teruel, núm. 112/2002 de 11 de junio de 2002 (ROJ: 125/2002).

SAP (Sección 1ª) de Teruel, 30 de marzo 2004 (ROJ: 76/2004).

SAP (Sección 2ª) de Guipúzcoa de 8 de marzo de 2007 (ROJ: 217/2007).

SAP (sección 2º) de Lleida del 15 de abril de del 2010(ROJ: 298/2010)

SAP (sección 21º) de Madrid, 23 de marzo de 2010 (ROJ 4192/2010).

SAP (sección 3º) de Castellón de la Plana, 10 de noviembre del 2015 (ROJ: 1041/2015).

SAP (sección 13º) de Barcelona, 5 de octubre de 2017 (ROJ: 9881/2017).

SAP (sección 14º) de Barcelona, 6 de febrero de 2018 (ROJ 724/2018).

## **5. PÁGINAS WEB**

Gobierno de Aragón, Departamento de Desarrollo Rural y sostenibilidad:

[http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA\\_Caza](http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_Caza).

Última entrada: 20/05/2018.

Gobierno de España, Ministerio de Agricultura y Pesca. Anuario de estadística agraria 2015:

<http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/2015/default.aspx>.

Última entrada: 20/05/2018.

ROSA CALVO, << Una manada de jabalíes se cuela en la expedición del Bada Huesca>>, *Heraldo*, 22 de noviembre de 2017:

<https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca-provincia/huesca/2017/11/22/una-manada-jabalies-cuela-expedicion-del-bada-huesca-1209452-302.html>.

Última entrada: 10/05/2018.

Actualidad Jurídica Ambiental:

<http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?s=responsabilidad+por+da%C3%B1os+agrarios>.

Última entrada: 22/05/2018.

Las ayudas a seguros agrarios;

<http://www.bbvacontuempresa.es/a/las-ayudas-a-seguros-agrarios-ya-son-una-subsuencion-directa>.

Última entrada: 20/05/2018.

Gobierno de España, Ministerio de Agricultura y Pesca. Guías de seguros agrarios:

[http://www.mapama.gob.es/es/enesa/publicaciones/guias\\_seguro\\_agrario.aspx](http://www.mapama.gob.es/es/enesa/publicaciones/guias_seguro_agrario.aspx).

Última entrada: 4/05/2018.

Gobierno de España, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y medio ambiente. Estadística Anual de Caza:

<http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/>.

Última entrada: 20/05/2018.

Europa Press, «Los cazadores advierten que Argoseguro continúa exigiendo el pago de las indemnizaciones» *Europa press, 20 minutos*, 23 de febrero de 2011:

<https://www.20minutos.es/noticia/968545/0/>.

Última entrada: 3/05/2018.